

especial para *El Norte*, edición del 25 de julio de 1993  
Empresarios y gobierno:  
¿un nuevo enfrentamiento?  
miguel ángel granados chapa

La historia no se repite en sentido estricto. Pero hay circunstancias semejantes que surgen de modo cíclico y conviene tenerlas presentes para comprender lo que ocurre hoy. En las postrimerías de no pocos periodos presidenciales la relación del Jefe del Estado con algunos sectores relevantes entró en franco deterioro. Puede documentarse que aun hace seis años la abierta cooperación habida entre dirigentes empresariales, por ejemplo, y el entonces Presidente De la Madrid, sufrió tensiones fuertes debido a la puesta en vigor del Pacto económico, que significó la adopción de medidas draconianas cuyo efecto, no visible en el corto plazo, estremeció a la mayor parte de las unidades productivas en todo el país.

La relación entre el Presidente Salinas y el sector empresarial parecían claramente destinadas a arribar a un puerto de abrigo al final de su sexenio. Aun la tentativa reeleccionista fue por eso admitida sin sobresalto por los dirigentes empresariales, así fuera sin estridencias. Ninguno la objetó en público, en cambio. Y si bien no tuvo un final feliz la historia de las cuotas multimillonarias solicitadas a los mayores magnates mexicanos para privatizar al PRI, el solo hecho de que pudieran reunirse los poseedores de casi todas las mayores fortunas, indicaba la temperatura cordial existente entre el Presidente y los dueños del capital.

Y sin embargo, es tan frágil la relación entre la iniciastiva privada y el gobierno, que el mínimo soplo del viento puede ponerla en riesgo. Y si se trata de vendaváles, con mayor razón. Claro que no se puede poner en una sola categoría a todos los empresarios, no sólo por su tamaño ni por la mayor o menor afectación de sus giros a causa de la política económica, y por lo tanto puede señalarse que siempre hubo sectores (los pequeños y microindustriales, por ejemplo) inconformes por la apertura comercial o por prácticas fiscales imperativas (la imposición de cajas registradoras, que enojó al comercio establecido) o por una política crediticia que ha encarecido el dinero.

Pero la aprobación de reformas a la ley del seguro social sintetizó las desavenencias calladas entre los empresarios, casi sin distinción, y el gobierno, y aun el Presidente de modo directo. No puede decirse que, en rigor, las modificaciones a la ley mencionada constituyeran un albazo para los representantes empresariales. Una semana antes de que se presentara formalmente la iniciativa correspondiente, en el despacho del secretario del Trabajo se realizaron reuniones de información y, mínimamente, de



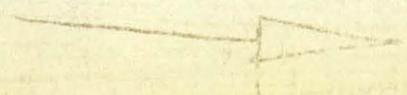
consulta sobre la intención gubernamental. En el marco del Consejo Técnico del IMSS, igualmente, el asunto fue planteado. Pero de pronto, con una velocidad vertiginosa, el proyecto de ley fue enviado a la Cámara de Diputados, que lo despachó con enorme celeridad y en el Senado, donde sucedió lo mismo. Ocurrir que las cosas lleguen sólo para el sancionamiento final, apenas se empleó unas horas en el trámite correspondiente.

En el momento en que la ley salió del Congreso, el Presidente Salinas viajaba a Centro y Sudamérica. Se esperaba su retorno con gran esperanza, para pedirle que se abstuviera de promulgar la ley, un paso en el proceso legislativo que le corresponde y en el que, en efecto, puede ser omiso. No está obligado de modo expreso a publicar la ley y si bien puede ser interpretada su abstención como lesiva al cumplimiento de sus funciones, el asunto es opinable y no era, por lo tanto, descabellada la idea de la Confederación Patronal de la República Mexicana de actuar sobre el Ejecutivo.

Pero apenas se reinstaló en su silla, tras su viaje a la república de El Salvador y su asistencia a la tercera Cumbre Iberoamericana, el Presidente promulgó la nueva ley, y por su parte por concluido el episodio. Los patronos necesariamente lo harán así. Abundarán las demandas de amparo, que difícilmente serán admitidas o resueltas a satisfacción de los quejosos. Pero, independientemente del transcurso jurídico de la cuestión, y aun dejando aparte el efecto económico que realmente produzcan las nuevas cuotas de seguridad social, el enfriamiento político que se ha derivado de su fijación es un resultado ya irreversible. Lo que podría ocurrir es que el malestar empresarial se ahondara y se convirtiera en la semilla de una nueva discordia entre empresarios y el Presidente.

Puesto que ya nada eficaz queda por hacer en términos políticos, dirigentes empresariales están encaminando su voluntad a obtener compensaciones ante los hechos consumados. Compensaciones políticas, se entiende. En ese sentido, por ejemplo, sin duda, el pleno de representantes de las agrupaciones de industria, comercio y servicios efectuado en Monterrey el jueves pasado. En una demanda que hasta ahora había sido patrimonio de los partidos de oposición respecto del organismo electoral que asegure transparencia y credibilidad a los comicios, los empresarios regionales (donde tradicionalmente se ha asentado el mayor poder económico privado, circunstancia hoy reforzada por los resultados de la privatización), los líderes empresariales de Nuevo León propusieron que el IMSS se integre como un organismo independiente gobernado por un consejo en que la iniciativa privada tuviera mayoría.

Con la presencia aun del sector financiero, tan bien tratado en esta y la anterior administración federales, como



- 3 -

el mundo productivo acudió a formular ese planteamiento: el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, el Centro Patronal, la Cámara de la Industria de la Transformación, el Centro Bancario, la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León. Si bien sus posiciones se concentraron en torno de las reformas a la seguridad social, una queja de mayor trascendencia cubría el escenario: el que de modo abrupto se hubiera alterado el mecanismo de concertación que tan bien les había parecido a las partes, hasta ahora. Y también la velocidad extrema, y la consiguiente falta de estudio, con que la ley fue enmendada. O sea, una diferencia de fondo, no meramente circunstancial.

Por añadidura, en Puebla, otro de los importantes enclaves empresariales del país, se recibió como una bofetada política la noticia del nombramiento del gobernador Mariano Piña Olaya para dirigir la Cia. de Luz y Fuerza del Centro. Como gobernador entre 1987 y 1993, Piña Olaya mantuvo una fría relación con los sectores productivos, que en vez de congelarse se tornó ardiente en el año postrero de su gobierno. El día en que rindió su último informe, por ejemplo, las agrupaciones empresariales decretaron un cierre de establecimientos que fue ampliamente acatado.

Aunque debieron practicar el credo expresado en el refrán que prescribe poner puente de plata al enemigo que huye (aunque en rigor no se trató de una fuga, sino de la conclusión formal y sabida del periodo gubernamental), los empresarios de Puebla hicieron de la revalidación de Piña Olaya una cuestión de principios. Y si bien demoraron en reaccionar, formularon una fuerte requisitoria al propio Presidente Salinas. Se dirigieron a él en los siguientes términos:

"Los organismos empresariales de Puebla hacemos eco de la indignación de la ciudadanía poblana ante el inexplicable nombramiento que se le ha otorgado al ex gobernador de Puebla, mariano Piña Olaya, después de haber mostrado incompetencia y desgobierno durante su gestión de triste memoria para los poblanos.

"No comprendemos que un funcionario con sus antecedentes sea premiado con un nombramiento de alto directivo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, donde es seguro que seguirá medrando en perjuicio de los mexicanos.

"La iniciativa privada y la sociedad poblana repudiamos esta acción, que consideramos una afrenta para quienes nos vimos perjudicados durante un sexenio de atraso y subdesarrollo, corrupción y pusilanimidad, y solicitamos se rectifique a tiempo una acción que nos ha desconcertado a los poblanos.

— 4 —

"México necesita de auténticos servidores públicos capaces de actuar conforme lo marca su atinado proyecto de modernización integral del país, y no más canonjías y prebendas a quienes actuaron totalmente en sentido opuesto.

"Sabemos que podemos contar con usted".

Si las cámaras y asociaciones que figuran al pie de esta comunicación al Presidente fueron efectivamente consultadas y avalan esas expresiones, efectivamente el repudio es universal. Aparece, por supuesto, el Consejo Coordinador Empresarial y no pocas cámaras de industria y comercio, así como algunos colegios de profesionistas y aun la Unión Social de Empresarios Mexicanos, un organismo de inspiración católica que ni siquiera en Puebla suele adoptar posiciones políticas, y menos una tan enfática y puntual como esta.

En Puebla se asienta uno de los poderes de representación política empresarial más evidentes y vigorosos, que han influido especialmente en la Coparmex en los años recientes. Puede orientar a un sector amplio hacia acciones y posturas beligerantes. Tiene tela de dónde cortar.

— 0 —